



A [REDACTED]
C
T
O
R
:
D SECRETARÍA DEL TRANSPORTE
E
M SECRETARÍA DE SEGURIDAD
A
N AMBAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
D
A SERVIDOR PÚBLICO [REDACTED] ADSCRITA AL
D ÁREA DE GESTIÓN DEL ESTACIONAMIENTO, DEPENDIENTE
A DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL
S AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO
:
SERVIDOR PÚBLICO [REDACTED] ADSCRITA AL ÁREA
DE GESTIÓN DEL ESTACIONAMIENTO, DEPENDIENTE DE LA
DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO
M JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL.
A
G
I
S
T
R
A
D
O
:
S JOSÉ FÉLIX CÁRDENAS GAYTÁN
E
C
R
E
T
A
R
I

O
:

Guadalajara, Jalisco, 15 quince de diciembre de 2020 dos mil veinte.

VISTOS para resolver en **Sentencia Definitiva** los autos del Juicio Administrativo cuyo número de expediente se indica al rubro, promovido por [REDACTED], en contra de la **SECRETARÍA DEL TRANSPORTE, SECRETARÍA DE SEGURIDAD, AMBAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, SERVIDOR PÚBLICO [REDACTED], ADSCRITA AL ÁREA DE GESTIÓN DEL ESTACIONAMIENTO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO,** así como **SERVIDOR PÚBLICO [REDACTED], ADSCRITA AL ÁREA DE GESTIÓN DEL ESTACIONAMIENTO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO,** y;

R E S U L T A N D O

1. Mediante escrito presentado el 2 dos julio 2020 dos mil veinte, a través de la Oficialía de Partes Común de este Tribunal, suscrito por [REDACTED], por su propio derecho interpuso Juicio en Materia Administrativa, por los motivos y conceptos que del mismo se desprendieron.

2. Por auto de 3 tres de agosto del 2020 dos mil veinte, se dio trámite a la demanda, teniéndose como autoridades demandadas a la –SECRETARÍA DEL TRANSPORTE, SECRETARÍA DE SEGURIDAD, AMBAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, SERVIDOR PÚBLICO [REDACTED], ADSCRITA AL ÁREA DE GESTIÓN DEL ESTACIONAMIENTO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO, así como SERVIDOR PÚBLICO [REDACTED] [REDACTED], ADSCRITA AL ÁREA DE GESTIÓN DEL ESTACIONAMIENTO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO-, y como actos administrativos impugnados, los siguientes:

- La cédula de notificación de infracción folio [REDACTED], emitida por personal adscrito a la Secretaría del Transporte y Secretaría de Seguridad.
- Las cédulas de notificación de infracción folios [REDACTED], emitidas por el servidor público María del Rosario Gómez Vargas, adscrita al Área de Gestión del Estacionamiento, dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, así como servidor público José Antonio Lemus Avalos, adscrita al Área de Gestión del Estacionamiento, dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco.



- **La devolución de la cantidad pagada** por concepto de la cédula de notificación de infracción folio [REDACTED], que ampara el recibo oficial [REDACTED] de fecha de pago 10 diez de marzo de 2020 dos mil veinte ante la Tesorería de Guadalajara, Jalisco.

Por encontrarse ajustadas a derecho y no ser contrarias a la moral, se admitieron las pruebas ofrecidas, teniéndose por desahogadas, las documentales señaladas en su escrito de demanda, así como la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, de su escrito inicial de demanda, en virtud de que la naturaleza de las mismas lo permitió.

Con las copias simples del escrito inicial de demanda y de los documentos anexos a la misma se ordenó correr traslado a las autoridades demandadas para que dentro del término de diez días contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación produjeran contestación a la demanda, ofrecieran y exhibieran pruebas con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se les tendrían como ciertos los hechos que no fueran contestados salvo que por las pruebas rendidas o hechos notorios resultaren desvirtuados y se les declararía por perdido el derecho a rendir pruebas.

Por otro lado, se requirió a las autoridades demandadas –Secretaría del Transporte y Secretaría de Seguridad, ambas del Estado de Jalisco-, para que al momento de contestar la demanda exhibieran copias certificadas de los actos combatidos, apercibidas que de no hacerlo así, se les aplicaría alguna medida de apremio prevista en el artículo 10 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco; sin perjuicio de tener como ciertas las afirmaciones que la parte actora pretende acreditar con dichos documentos, salvo disposición en contrario como lo establece el artículo 293 del Código de procedimientos civiles del Estado, de aplicación supletoria, también se habilitaron días y horas inhábiles, a efecto de que se practicaran las notificaciones que derivaran de la tramitación del presente juicio, por ser necesario para su debida substanciación.

3. Con fecha 4 cuatro de noviembre del año 2020 dos mil veinte, se tuvo a la Directora de lo Jurídico Contencioso del Municipio de Guadalajara, Jalisco, quien compareció en representación de las autoridades demandadas –SERVIDOR PÚBLICO MARÍA DEL ROSARIO GÓMEZ VARGAS, ADSCRITA AL ÁREA DE GESTIÓN DEL ESTACIONAMIENTO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO, así como SERVIDOR PÚBLICO JOSÉ ANTONIO LEMUS AVALOS, ADSCRITA AL ÁREA DE GESTIÓN DEL ESTACIONAMIENTO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO-, así como al Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado, produciendo contestación a la demanda, por opuestas las excepciones y defensas que de sus escritos se desprendieron, se admitieron las pruebas ofrecidas por encontrarse ajustadas a derecho y no ser contrarias a la moral, teniéndose por desahogadas, de la autoridad mencionada en primer término, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana y del segundo

de los mencionados, las documentales señaladas con los números 1 y 3, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana; en virtud de que la naturaleza de las mismas lo permitió.

Por otra parte, se dio cuenta que la diversa autoridad demandada –Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco-, no produjo contestación a la demanda instaurada en su contra, no obstante de haber sido debidamente emplazada y notificada, motivo por el cual se le hizo efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de fecha 3 tres de agosto del año 2020 dos mil veinte y se le declaró la correspondiente rebeldía.

También, se advirtió que las autoridades demandadas –Secretaría del Transporte y Secretaría de Seguridad, ambas del Estado de Jalisco-, fueron omisas en cumplir con el requerimiento formulado en auto de admisorio, motivo por el cual se les hizo efectivo el apercibimiento ahí contenido y se les tuvieron por ciertos los hechos que la parte actora pretende acreditar con dichos documentos, salvo disposición en contrario.

Finalmente, se dio cuenta que las pruebas admitidas, se habían desahogado en su totalidad, además de que lo controvertido involucra cuestiones puramente de derecho, se otorgó a las partes un término común de tres días a fin de que formularan **alegatos**, apercibiéndoles que, en caso de no hacerlo así, se les tendría por perdido el derecho en ese sentido y se turnarían los autos para que se dictara la sentencia definitiva que en derecho correspondiera.

4. Sin que al efecto las partes hubieran comparecido a expresar alegatos dentro del término que para tal efecto les fue concedido, en el último párrafo del acuerdo establecido en el punto que antecede, en consecuencia, se les hacen efectivos los apercibimientos ahí contenidos y se le **declara** por perdido el derecho a rendir alegatos, ordenándose turnar los autos para que se dicte la Sentencia Definitiva que en derecho corresponda, la cual hoy se pronuncia de conformidad a los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

I. Este Tribunal es competente para conocer y resolver la presente controversia con base en lo dispuesto por el artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, 3, 4, 5, 10 y demás relativos de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como los artículos 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 72, 73, 74, relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.



II. La existencia de los actos administrativos impugnados se encuentra debidamente acreditada en actuaciones con las documentales que obran agregadas a fojas 6, 7 y 8, a las que se les otorga valor probatorio pleno en los términos de los artículos 48¹, 57² y 58³ de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como en los diversos numerales 399⁴ y 400⁵ del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, de aplicación supletoria a la Ley Adjética de la Materia.

III. Según criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación, no se hace necesario transcribir los conceptos de impugnación que hiciera valer el accionante en su escrito inicial de demanda, ni la contestación realizada por las autoridades demandadas, toda vez que dicha omisión no deja en estado de indefensión a ninguna de las partes; se sustenta lo anterior por analogía y para mayor claridad se transcribe la siguiente Jurisprudencia:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan

¹ Artículo 48. En los juicios a que se refiere esta ley será admisible toda clase de pruebas, excepto la confesional mediante absolución de posiciones, las que no tengan relación con los hechos controvertidos, las contrarias a la moral y al derecho; y las que no hayan sido ofrecidas ante la autoridad demandada en el procedimiento administrativo, salvo que en éste no se le hubiera dado oportunidad razonable de hacerlo.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse antes de citación para sentencia. En este caso, la Sala ordenará dar vista a la contraparte para que en el término de cinco días exprese lo que a su derecho convenga, reservándose su admisión y valoración hasta la sentencia definitiva.

² Artículo 57. El ofrecimiento y desahogo de pruebas, salvo lo expresamente previsto en la presente ley, se regirá por las disposiciones relativas del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

³ Artículo 58. La valoración de las pruebas se hará conforme a las disposiciones relativas del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

⁴ Artículo 399.- Los instrumentos públicos hacen prueba plena, aunque se presenten sin citación del colitigante, salvo siempre el derecho de éste para redargüirlos de falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos y archivos. En caso de inconformidad con el protocolo o archivo, los instrumentos no tendrán valor probatorio en el punto en que existiere la inconformidad.

⁵ Artículo 400.- Los instrumentos públicos no se perjudicarán en cuanto a su validez por las excepciones que se aleguen para destruir la acción que en ellos se funde; y no podrán objetarse sino con otros posteriores de la misma especie, salvo el caso de simulación en el que se podrá hacer uso de cualquier otro medio de prueba.

hecho valer.” Novena Época. Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI. Mayo de 2010. Tesis: 2a./J.58/2010. Página: 830.

IV. Resultan **procedentes** los conceptos de impugnación expresado por [REDACTED], contenidos en su escrito inicial de demanda, por lo que de conformidad a lo dispuesto por las fracciones II y IV de los artículos 74⁶ y 75⁷ de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, procede **declarar la nulidad** de los siguientes actos administrativos:

- La cédula de notificación de infracción folio [REDACTED], emitida por personal adscrito a la Secretaría del Transporte y Secretaría de Seguridad.
- Las cédulas de notificación de infracción folios [REDACTED], emitidas por el servidor público [REDACTED], adscrita al Área de Gestión del Estacionamiento, dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, así como servidor público [REDACTED], adscrita al Área de Gestión del Estacionamiento, dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco.

Actos imputados al vehículo con placas de circulación [REDACTED]

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 72 de la normatividad invocada en el párrafo que antecede, se procede al examen de las causas de ilegalidad que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución combatida y más benéfica para el accionante, atento al citado dispositivo legal, así como a la tesis que aquí se inserta:

“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EN ATENCIÓN AL ORDEN QUE SEÑALA LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN, DEBEN ANALIZARSE EN PRIMER LUGAR AQUELLOS QUE LLEVEN A DECLARAR LA NULIDAD MÁS BENÉFICA PARA EL ACTOR. En el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se encuentra contenido el principio de exhaustividad de las sentencias en materia fiscal, al imponer a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la obligación de examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, iniciando por aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana, y después por los

⁶Artículo 74. La sentencia definitiva podrá:

I. Reconocer la validez de la resolución o del acto impugnado
II. Declarar la nulidad de la resolución o acto combatido;”

⁷ “Artículo 75. Serán causas de anulación de una resolución, de un acto o de un procedimiento administrativo:

I. ...
II. ...
III. ...

IV. La omisión o incumplimiento de las formalidades que legalmente debe revestir la resolución o el acto, cuando afecte las defensas del particular y trascienda el sentido de la resolución o acto impugnado;



que se refieran a la omisión de requisitos formales o vicios del procedimiento, lo que se traduce en la obligación de analizar, en primer lugar, los motivos de nulidad que lleven a una declaratoria de nulidad más benéfica para el actor, y sólo en el evento de estimarlos infundados, se pronuncie sobre los conceptos de impugnación que lleven a una declaratoria de nulidad para efectos, bien sea de la llamada comúnmente "del tercer tipo", por versar sobre el ejercicio de facultades discrecionales o, en su caso, para otros efectos." Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, Tesis: VIII.1o.86 A. Página: 1828.

En atención a los numerales y Jurisprudencia señalada, se procede al análisis de los conceptos de impugnación vertidos en su demanda, en el cual refiere de manera esencial desconocer que las cédulas de notificación de infracción impugnadas, las cuales no le fueron notificadas, además agrega que las diversas cédulas de notificación de infracción folios [REDACTED], se encuentran indebidamente fundadas y motivadas, violentando con ello lo previsto en los numerales 12 y 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, por lo que considera que deberá declararse la nulidad de los actos materia de la controversia.

Al manifestarse a lo anterior, la Directora de lo Jurídico Contencioso del Municipio de Guadalajara, Jalisco, quien compareció en representación de las autoridades demandadas – SERVIDOR PÚBLICO [REDACTED], ADSCRITA AL ÁREA DE GESTIÓN DEL ESTACIONAMIENTO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO, así como SERVIDOR PÚBLICO [REDACTED], ADSCRITA AL ÁREA DE GESTIÓN DEL ESTACIONAMIENTO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO-, así como el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado, en sus escritos de contestación de demanda, manifiestan que resultan infundados e inoperantes los argumentos vertidos por el accionante, ya que los actos administrativos controvertidos se encuentran debidamente fundados y motivados, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos de validez que deben contener los actos administrativos de conformidad a lo previsto en los numerales 12 y 13 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

Sin que al efecto, la autoridad demandada -Secretaría del Transporte del Estado de Jalisco-, haya realizado manifestación alguna respecto a los conceptos de impugnación vertidos por el accionante, en razón de que en el acuerdo de fecha 4 cuatro de noviembre del año 2020 dos mil veinte, se le declaró la correspondiente rebeldía.

Derivado de los argumentos establecidos en párrafos anteriores, se considera **fundado** lo alegado por el accionante, cuando refiere que las cédulas de notificación de infracción impugnadas, violenta las formalidades esenciales del procedimiento, ya que no le fue

debidamente notificada, no obstante que las autoridades demandadas –Secretaría del Transporte y Secretaría de Seguridad del Estado, ambas del Estado de Jalisco-, se encuentran obligadas a ello de conformidad a lo dispuesto por el artículo 377⁸, así como por la fracción III, del artículo 378⁹ del Reglamento de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en los cuales se establece que en caso de que el conductor no se encuentre en el lugar del vehículo, el agente vial procederá a elaborar la cédula de notificación correspondiente y la dejará en un lugar visible y seguro del vehículo, con independencia de los motivos que hayan generado el levantamiento de la misma, así como aquella que sean detectadas a través de equipos o sistemas tecnológicos, se harán constar en la cédula de notificación de infracción, así como que la misma deberá ser notificada al propietario del vehículo dentro de los sesenta días naturales posteriores a su levantamiento, en el domicilio que aquél tenga registrado ante la Secretaría en materia fiscal en el Estado.

También se precisa en el dispositivo legal citado en último lugar, que en el caso de las notificaciones por correo certificado, si el domicilio se encuentra cerrado y nadie responde para la entrega del documento, se realizará una segunda visita por parte del servicio de correspondencia; no obstante lo anterior, si no es posible recabarse la firma del destinatario, se atenderá la diligencia con quien en su nombre lo reciba o si éstos no se encuentran en el domicilio, se levantará constancia de ello, además el actor refiere que hasta el momento de la presentación de la demanda desconoce su contenido, tan es así que solicitó se requiriera a las autoridades emisoras para estar en posibilidad de ampliar su demanda; sin embargo en auto de 4 cuatro de noviembre del año 2020 dos mil veinte, se dio cuenta que las autoridades demandadas – Secretaría del Transporte y Secretaría de Seguridad del Estado-, no remitieron los actos administrativos controvertidos, motivo por el cual se le tuvieron como ciertos los hechos que la parte actora pretende acreditar con esa documental, de ahí resulta claro que ha excedido en demasía el término de los sesenta días naturales que las autoridades demandadas tenían para notificar la cédula controvertida; quedando de manifiesto para esta autoridad que se actualiza un estado de inseguridad jurídica e indefensión, al no haber sido legal y debidamente notificada, toda vez que constituye un derecho de los particulares y una garantía de seguridad jurídica frente a la actividad de la administración pública, por lo que se violentaron las formalidades esenciales del procedimiento, así como la garantía de legalidad y seguridad jurídica resguardadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que trae como consecuencia **declarar la nulidad** de la cédula de notificación de infracción folio [REDACTED], emitida por personal adscrito a la Secretaría del Transporte y Secretaría de Seguridad, actos imputados al vehículo con placas de circulación [REDACTED], sustenta lo anterior el siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación:

⁸ Artículo 377. En el caso del conductor que habiendo cometido alguna de las infracciones previstas por la Ley o el Reglamento, no se encuentre en el lugar del vehículo, el Policía Vial Estatal o Policía de Tránsito Municipal procederá a elaborar la cédula de notificación correspondiente, la que dejará en lugar visible y seguro del automotor.

⁹ Artículo 378. Las infracciones a la Ley o a este Reglamento, que sean detectadas a través de equipos o sistemas tecnológicos, se harán constar en cédula de notificación de infracción, en los términos del Título Séptimo, capítulo IV de la Ley, para lo cual se verificarán las siguientes acciones:

III. La cédula deberá ser notificada al propietario del vehículo dentro de los sesenta días naturales posteriores al levantamiento de la misma, en el domicilio que aquél tenga registrado ante la Secretaría en materia fiscal en el Estado. En caso de las notificaciones por correo certificado, si el domicilio se encuentra cerrado y nadie responde para la entrega del documento, se realizará una segunda visita por parte del servicio de correspondencia; no obstante lo anterior, si no es posible recabarse la firma del destinatario, se atenderá la diligencia con quien en su nombre lo recibas o si éstos no se encuentran en el domicilio, se levantará constancia de ello.



“FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.” Octava Época. Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXI. Mayo de 1992. Tesis: P.LV/92. Página: 34.

La ausencia de notificación personal constituye la omisión de un requisito formal, un vicio que afecta el derecho humano a la seguridad jurídica tutelado por el artículo 16 de la Constitución Federal, que actualiza el supuesto de nulidad previsto en el artículo 75, fracción IV, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, que en principio conlleva a una declaratoria de nulidad en términos del diverso 76, tercer párrafo, de dicha Ley; sin embargo esta regla admite excepciones atendiendo al tipo y origen de los actos impugnados en el Juicio Administrativo, de este manera, en los casos, cómo el que se analiza debe ser declarada en forma lisa y llana, porque el requisito de la notificación personal al gobernado, dentro de los 60 días siguientes al levantamiento de la infracción, implica que tal situación no podría retrotraerse a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, al que dieron origen al levantamiento de la cédula de notificación de infracción y su consiguiente notificación personal, cuestiones que resultan prácticamente imposibles de repetirse, por lo cual la autoridad está impedida para corregir tales eventualidades.

También se considera **fundado** lo aseverado por la parte actora cuando refiere que las cédulas de notificación de infracción folios [REDACTED], emitidas por el servidor público María del Rosario Gómez Vargas, adscrita al Área de Gestión del Estacionamiento, dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, así como servidor público José Antonio Lemus Avalos, adscrita al Área de Gestión del Estacionamiento,

dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, se encuentran indebidamente fundadas y motivadas, según los requisitos a que alude el artículo 13 fracción III, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, que señala:

“Artículo 13. Son requisitos de validez del acto administrativo:

- I. *Constar por escrito;*
- II. *Contener la mención del lugar, fecha y autoridad que lo suscribe;*
- III. ***Estar debidamente fundado y motivado;***
- IV. *Contener la manifestación clara y precisa del objeto del acto;*
- V. *Contener la referencia específica de identificación del expediente que se trate y nombre completo del o los interesados;*
- VI. *Ser notificado apegándose a los ordenamientos en vigor aplicables y en su caso publicado. Igualmente deberá mencionar los recursos administrativos que puede interponer su destinatario en caso de desacuerdo;*
- VII. *Dar intervención a terceros interesados cuando el ordenamiento de la materia así lo establezca; y*
- VIII. *Ser efectuado por el servidor público facultado para ello.”*

Toda vez que del texto de la cédula de notificación controvertida, en el apartado relativo al motivo de la sanción, no se estableció una relación entre el dispositivo legal invocado y un razonamiento lógico en el que debieron de haberse sustentado la autoridad emisora de la cédula de notificación de infracción impugnada, sin especificar además las circunstancias de hechos, razones particulares y causas inmediatas que tomaron en consideración para la aplicación de la multa respectiva, ni cómo es que se percató de que el vehículo del accionante se encontraba en la hipótesis descrita en la citada cédula, quedando de manifiesto para esta autoridad que se actualiza un estado de inseguridad jurídica e indefensión, contraviniendo lo previsto por la fracción III, del artículo 13, de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

Confirma lo anterior si se toma en cuenta que la autoridad demandada, manifestó que la cédula combatida, se encuentra suficiente y debidamente fundado y motivado, al igual cumple con los requisitos de validez; violentándose con ello las garantías de legalidad y seguridad



jurídica contenidas en los artículos 14¹⁰ y 16¹¹ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales exigen que en todo acto de autoridad se señale con exactitud y precisión el o los dispositivos que facultan a quien lo emite, así como las normas aplicables al caso concreto en el que se apoye su actuar, atento a la exigencia constitucional de certeza y seguridad jurídica del particular frente a los actos de autoridad que afectan o lesionan su interés jurídico, lo que trae como consecuencia declarar **nulidad** de las cédulas de notificación de infracción folios [REDACTED], emitidas por el servidor público [REDACTED], adscrita al Área de Gestión del Estacionamiento, dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, así como servidor público [REDACTED], adscrita al Área de Gestión del Estacionamiento, dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, impuestas al vehículo con placas de circulación [REDACTED].

Toda vez que, en la misma se dejaron de aplicar las debidas disposiciones legales, actualizándose la causal de anulación prevista por el artículo 75 fracción II de la ley adjetiva de la materia. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Novena Época, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, del mes de marzo de 1996, visible en la página 769, que informa:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. *La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.”*

Derivado de la nulidad declarada en párrafos que anteceden, una vez que cause estado la presente resolución, la **TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO**, como autoridad demandada y ejecutora del cobro respecto de las resoluciones impugnadas, deberá realizar **la devolución del pago** efectuado por el actor, única y exclusivamente de los conceptos que fue declarada su nulidad, pago que fue realizado a través

¹⁰ Artículo 14. *A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.*

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”

¹¹ “Artículo 16. *Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”*

del recibo oficial [REDACTED], de fecha de pago 10 diez de marzo de 2020 dos mil veinte ante la Tesorería de Guadalajara, Jalisco.

Bajo las argumentaciones vertidas, se considera innecesario entrar al estudio de los demás conceptos de anulación y pruebas aportadas al sumario que hacen valer las partes, porque su estudio sería innecesario al no influir en la variación del sentido de esta resolución, en términos del criterio Jurisprudencial consultable con el número de registro 172,578, Novena Época, página 1743, Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el mes de Mayo de 2007 que dice:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ES INNECESARIO SU ESTUDIO, CUANDO LA DECLARACIÓN DE FIRMEZA DE UNA CONSIDERACIÓN AUTÓNOMA DE LA SENTENCIA RECLAMADA ES SUFICIENTE PARA REGIR SU SENTIDO. Si el tribunal responsable, para sustentar el sentido de la resolución reclamada, expresó diversas consideraciones, las cuales resultan autónomas o independientes entre sí y suficientes cada una de ellas para regir su sentido, la ineficacia de los conceptos de violación tocantes a evidenciar la ilegalidad de alguna de tales consideraciones, hace innecesario el estudio de los restantes, pues su examen en nada variaría el sentido de la resolución reclamada, ya que basta que quede firme alguna para que dicha consideración sustente por sí sola el sentido del fallo.”

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 31, 35, 36, 39, 42, 44, 45, 47, 72, 73, 74, 75, 76, relativos y aplicables de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, se concluye la presente controversia, de conformidad con los siguientes:

R E S O L U T I V O S

PRIMERO. La C. [REDACTED], parte actora en el presente juicio, **desvirtuó** la legalidad de los actos administrativos impugnados.

SEGUNDO. Se **declara la nulidad** de la cédula de notificación de infracción folio **113|330033479**, emitida por personal adscrito a la Secretaría del Transporte y Secretaría de Seguridad, así como de las cédulas de notificación de infracción folios [REDACTED] emitidas por el servidor público [REDACTED], adscrita al Área de Gestión del Estacionamiento, dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, así como servidor público [REDACTED], adscrita al Área de Gestión del Estacionamiento, dependiente de la Dirección de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, actos imputados al vehículo con placas de circulación [REDACTED] por los motivos y razonamientos expuestos en el quinto considerando del cuerpo de la presente resolución.



TERCERO. Derivado de la nulidad declarada en párrafos que anteceden, una vez que cause estado la presente resolución, la **TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, JALISCO**, como autoridad demandada y ejecutora del cobro respecto de las resoluciones impugnadas, deberá realizar **la devolución del pago** efectuado por el actor, única y exclusivamente de los conceptos que fue declarada su nulidad, pago que fue realizado a través del recibo oficial [REDACTED], de fecha de pago 10 diez de marzo de 2020 dos mil veinte ante la Tesorería de Guadalajara, Jalisco.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

Así, lo resolvió el Presidente de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, MAGISTRADO JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL, ante la presencia del Secretario de la misma JOSÉ FÉLIX CÁRDENAS GAYTÁN, quien autoriza y da fe.

EL MAGISTRADO PRESIDENTE

JUAN LUIS GONZÁLEZ MONTIEL

EL SECRETARIO DE LA SALA

JOSÉ FÉLIX CÁRDENAS GAYTÁN

JLGM/JGVC/nts

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y reservada que deberán observar los Sujetos Obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, representante legal, domicilio de la parte actora, etc.), información considerada legalmente como confidencial, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente”.